

AGOSTO 10 DE 1932

49ª REUNION — 32ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA Y AUGUSTO BUNGE

DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Antelo Mario, Araújo Ernesto M., Araújo José Ignacio, Argonz Joaquín, Bermúdez Manuel A., Besasso Domingo, Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bordabehere Enzo, Bosano Ansaldo Daniel, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cafferata Juan F., Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Castellanos José D., Castiglioni Eduardo, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Colombres Carlos G., Contte José A., Cornejo Arias Víctor, Corominas Segura Rodolfo, Coronel Carlos, Cortés Arteaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Costanti Gerardo, Da Rocha Arturo, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Duhau Luis, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreyra Antenor R., Fresco Manuel A., Frías Silva Raúl, Ganza Marcelino, Garayalde José María, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán F., González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Harispe Albino H., Herráiz Pascual, Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Lamesa Jun B., Lazo Plácido C., Lima Vicente Solano, López Héctor S., Loredó José, Loyarte Ramón G., Luján Abdón P., Magris Amleto, Mancini Rafael, Martella Julio C., Martínez Erasmo, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Mayo Ramón, Messone Ricardo N., Moreira Alejandro E., Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan E., Mosset Iturraspe Mario, Mouchet Enrique, Moussa Eduardo, Moyano Rodolfo, Navello Miguel V., Nigro Juan, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palisa Mujica Arturo, Palmeiro José, Parera Gregorio, Parodi Misael J., Pascarelli Miguel, Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pflieger José E., Pietranera Bruno J., Pinedo Federico, Pintos Angel, Pomponio Vicente E., Pressacco Juan P., Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rodríguez Pinto Domingo, Rojas Marcos E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Guíñazú Jacinto, Saggese Angel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Sierra Bernardo, Simón Padrós Juan, Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Uriburu Francisco, Viechi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Vignart Uberto F., Vionnet Rodolfo L., Zarazaga Marcial J.; AUSENTES, CON LICENCIA: Courel Carlos D., Grisolia Luis, Molina Serapio, Salas José Raquel, Zalazar Altamira Benjamín, Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON AVISO: Albarracín Belisario, Amadeo y Videla Daniel, Becerra Eugenio A. (h.), Pereira Clodomiro, Vega Abraham de la; AUSENTES, SIN AVISO: Calderón Osvaldo M., Carreras José, Carús Agustín J., Dávila Miguel B., Maglione Francisco I., Manacorda Carlos.

SUMARIO

1.—Acta.

2.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones oficiales varias.

II.—Despachos de comisión.

III.—Comunicaciones de comisión.

IV.—Peticiónes particulares.

V.—Proyecto de ley del señor diputado Ghioldi sobre exigencia nacional para el otorgamiento de concesiones.

VI.—Proyecto de ley de los señores diputados Carreras (J.) y Antelo sobre creación de un hospital regional en Melincué, departa-

mento General López, provincia de Santa Fe.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado González (B. S.) y otros, sobre Patronato Nacional de Menores.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Ahumada declarando zona palúdica el territorio de las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Zalazar Altamira, Salas y Molina.

4.—Moción del señor diputado Bruchou, aprobada, para que se trate sobre tablas el despacho de la Comisión de Presu-

puesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre auxilio a las damnificados por el ciclón que azotó varias zonas de la provincia de Corrientes.

- 5.—Consideración del despacho a que se refiere el número anterior.
- 6.—Indicación del señor diputada Pérez Leirós para que se inserten en el Diario de Sesiones dos notas relacionadas con el despacho sobre reformas al artículo 157 del Código de Comercio.
- 7.—A moción del señor diputado Fresco, se aplaza la consideración del despacho sobre veto del Poder Ejecutivo al artículo 8º de la ley general de presupuesto.
- 8.—Termina la consideración del despacho de la Comisión Parlamentaria para combatir la desocupación, sobre terminación de las obras del puerto de Mar del Plata.
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes en el proyecto de ley, en revisión, sobre cambio de la denominación de la imprenta de la Cámara de Diputados por la de Imprenta del Congreso.
- 10.—Consideración del despacho de la Comisión de Instrucción Pública en el proyecto de ley, en revisión, autorizando a la Universidad Nacional de Buenos Aires a enajenar un terreno y destinar el producido de la venta a la construcción del edificio para la Facultad de Ciencias Económicas.
- 11.—Consideración del despacho de la Comisión Parlamentaria para combatir la desocupación, sobre obras de desagüe en la cañada San Antonio y arroyo Tortugas, en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
- 12.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley sobre compraventa de casas de comercio.
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Guerra y Marina en los proyectos de ley sobre excepciones al servicio militar y supresión de la tasa militar.
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Guerra y Marina no haciendo lugar a la solicitud de promoción presentada por el subteniente veterinario Quiterio Gutiérrez.

- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Guerra y Marina no haciendo lugar a la solicitud de inclusión en los beneficios del artículo 30 de la ley 9.675, presentada por el teniente coronel don Justo Rubén Cabeza.
- 16.—Consideración del despacho de la Comisión de Guerra y Marina no haciendo lugar a la solicitud de reconsideración de la ley 11.374, presentada por los herederos del teniente general don Juan Pablo López.
- 17.—Indicación del señor diputado Spinetto, relativa al proyecto de amnistia a los infractores de la ley de enrolamiento.
- 18.—Asuntos entrados:

IX.—Despacho de comisión.

- 19.—A indicación del señor diputado Godoy, vuelve a comisión el despacho sobre veto del Poder Ejecutivo al artículo 8º de la ley general de presupuesto.
- 20.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley sobre modificación del artículo 47 de la ley 10.650.
- 21.—A indicación del señor diputado Dickmann (E.), se aplaza la consideración del despacho de la Comisión de Legislación General contenido en la orden del día número 35.
- 22.—Aplazamiento de la consideración del despacho sobre sufragio femenino.

—En Buenos Aires, a diez de Agosto de 1932, siendo la hora 15 y 30:

1

ACTA

Sr. Presidente (Cafferata). — Queda abierta la sesión con la presencia de 85 señores diputados.

Se va a leer el acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Argonz se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

exacto todo cuanto ha dicho, siendo inoficioso reeditar sus palabras para recalcar la importancia de este proyecto. Pero debo hacer notar que éste es un trabajo que si bien la Nación va a adelantar los fondos para llevarlo a cabo, ella va a ser beneficiada por las tierras que se mejoran; y, de acuerdo con lo establecido en el contrato celebrado entre ambas provincias, va a fijarse un canon proporcional a las hectáreas que tenga cada uno de los propietarios beneficiados, de modo que la Nación sólo hace un anticipo. Hago esta advertencia porque a muchos diputados de provincia podría parecerles bien que la Nación ayudara en su ayuda y, dada la situación financiera que atravesamos, es conveniente subrayar que en este caso se trata de una ayuda provisional: Córdoba y Santa Fe van a reintegrar esa suma, que a su vez percibirán de los propietarios beneficiados.

Estos trabajos de desagüe, señor presidente, son una de las obras de progreso iniciadas por los gobiernos que he mencionado, de lo que quiero dejar constancia, a fin de que no queden en el olvido los precursores de esta grande e importante obra.

Nada más.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa.

— Sin observación se aprueba en particular el artículo 1º.

Sr. Presidente (Bunge). — En consideración el artículo 2º.

Sr. Costa Méndez. — Pido la palabra.

Como he dicho, en este artículo hay un error material. En lugar de «títulos de obras públicas», debe decir «títulos de crédito argentino interno cuya emisión haya sido autorizada por leyes anteriores.»

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el artículo con esa modificación.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Zambrano). — El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente (Bunge). — Queda sancionado el proyecto.

12

COMPRAVENTA DE CASAS DE COMERCIO

Sr. Presidente (Bunge). — De acuerdo con el orden de preferencias votado por la Cámara, corresponde tratar la orden del día número 10.

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha estudiado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Colombres, sobre compraventa de casas de comercio; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de la comisión, Junio 22 de 1932.

Luis Grisolia. — Próspero Abalos. —

Carlos G. Colombres. — Carlos D.

Courel. — Enrique Dickmann. —

Bernardo Sierra.

ANTECEDENTES

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Decláranse elementos constitutivos de un establecimiento comercial e industrial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábricas, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.

Art. 2º — Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial e industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, sólo podrán efectuarse válidamente previo anuncio durante diez días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o

provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase de negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador o del rematador, y en caso que interviniese, el del escribano con cuya actuación se realizará el acto.

Art. 3º — El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, créditos por los que se podrá solicitar medidas preventivas de inmediato, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación.

Art. 4º — El documento de transmisión recién podrá firmarse después de transcurridos cinco días desde la última publicación y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transferencia, podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el Banco de la Nación, de las sumas necesarias para el pago.

Art. 5º — El comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de veinte días, a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial.

Art. 6º — Transcurrido el plazo que señala el artículo 4º sin mediar oposición, o llenándose las formalidades del artículo anterior, si ella se hubiera producido, recién podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que, para producir efecto con relación a terceros, deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez días en el Registro Público de Comercio, o en un registro especial creado al efecto.

Art. 7º — No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4º, salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores.

Estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio.

Art. 8º — A los efectos determinados en el artículo anterior, se presumen simuladas juris et de jure las entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor y en tanto cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores.

Art. 9º — En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de ventas fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2º, ajustándose a las obligaciones señaladas en los artículos 4º y 5º en el caso de notificársele oposición.

Art. 10. — Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano, por el importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de sus omisiones y hasta el monto del precio de lo vendido.

Art. 11. — El Registro Público de Comercio o el especial que se organice, llevará los libros correspondientes para la inscripción de las transmisiones de establecimientos comerciales e industriales, cobrando a ese efecto los derechos que determinen las leyes de impuestos.

Art. 12. — Comuníquese, etc.

Carlos G. Colombres.

Sr. Presidente (Bunge). — En consideración.

Sr. Abalos. — Pido la palabra.

El despacho que voy a informar se refiere a un asunto de gran importancia para el comercio honesto del país. Se trata de reglamentar la transmisión de las casas de comercio.

Al dictarse nuestro Código de Comercio no se incluyeron disposiciones relacionadas con la compraventa de casas de comercio, porque las operaciones mercantiles no tenían entonces la importancia que tienen hoy y no podía preverse las distintas situaciones que originan ahora en la práctica estas transmisiones. Con el mayor incremento tomado por el comercio, ha nacido

la necesidad de prever distintas circunstancias a fin de resguardar al comercio honesto con respecto a situaciones que pueden presentarse, especialmente situaciones de carácter doloso, que pueden ocasionar grandes perjuicios.

No se concibe el comercio sin el crédito, y es indispensable adoptar las medidas que sirven para poner a salvo el crédito propulsor del comercio honesto.

Desde hace varios años, se ve con frecuencia que un comerciante obtiene mercaderías a crédito y una vez formalizado su comercio lo vende sin aviso ni conocimiento del comerciante acreedor. El comerciante, en estas circunstancias se ve privado de lo único que garantiza su crédito, es decir, de las mercaderías. Indudablemente tiene la vía comercial y la vía criminal para iniciar juicio, pero aun en el supuesto caso de éxito, aun en el supuesto caso de la declaratoria de quiebra, o bien de un auto de prisión, en nada se modifica su situación, porque él queda burlado en su crédito.

El estado actual de nuestra legislación comercial, señor presidente, por lo que respecta a la compraventa de esta clase de negocios, puede decirse que se encuentra comprendido dentro de la situación especialísima siguiente. Vendida la casa de comercio, el comerciante acreedor no tiene participación absolutamente de ninguna clase en esta operación. No hay publicación, tampoco una sanción de la ley penal ni tampoco de la ley comercial, que es precisamente lo que la reglamentación de la compraventa de estas casas prevé con este proyecto de ley.

Este despacho tiende principalmente a que el comerciante acreedor tenga participación en la compraventa de estas casas de comercio y además se le trata de dar la publicidad suficiente para que todos los acreedores puedan tomar la participación necesaria, a fin de salvaguardar su crédito en el acto de la venta.

La ley va más lejos aún, cuando prevé el caso del comerciante deshonesto y establece una sanción punitiva a fin de que tenga el castigo que correspon-

de al proceder de un comerciante deshonesto.

En esta Cámara se han presentado varios proyectos de reglamentación de las transmisiones de casas de comercio. El primer proyecto fué presentado por el doctor Celesia el 30 de Julio de 1913. El doctor Melo, siendo diputado, presentó otro proyecto en Septiembre de 1915, proyecto que fué reproducido posteriormente en la Cámara de Senadores. Después, los doctores Roca y Ortiz presentaron también proyectos de reglamentación en 1922. El señor diputado Chiosone presentó otro en 1927.

La opinión pública, señor presidente, ha apoyado siempre estos proyectos solicitando como una necesidad la incorporación a nuestro Código de Comercio de esta reglamentación que es tan necesaria. En el congreso del Colegio de Abogados celebrado en Córdoba en 1926, representantes del comercio y de la industria presentaron, también, un proyecto de reglamentación de la compraventa de casas de comercio. Fué aprobado por unanimidad y en esa resolución se dispuso solicitar ante los poderes públicos la incorporación de esa ley al Código de Comercio.

La comisión ha estudiado el proyecto presentado últimamente por el doctor Colombres y lo ha apoyado, presentando tal cual lo presentara su autor, entendiendo que al hacerlo es porque este proyecto prevé todas las situaciones que pueden presentarse.

Además, distintas asociaciones han aconsejado determinadas reformas que la comisión las ha tenido en cuenta. Este proyecto, señor presidente, como el proyecto presentado por el doctor Melo en la Cámara de Diputados y reproducido en el Senado, hace una clasificación y hace también una distinción de lo que debe entenderse por casa de comercio, determinando las distintas situaciones que pueden presentarse y determinando lo que debe comprenderse por casa de comercio.

En sus distintos artículos toma como punto de referencia la publicidad que debe darse a estos actos durante un determinado número de días, a fin de

que el comerciante acreedor pueda tomar nota y participar en las gestiones sucesivas. Tiene esta reglamentación también como objetivo principal dar una participación al acreedor, a fin de que interviniendo en forma capital pueda defender sus intereses. La ley prevé, también, el plazo para la inscripción, y determina un cierto número de días para hacerla.

Finalmente, la ley en su espíritu de previsión, va también al hecho de que el comerciante que pretendiera vender la casa de comercio, omitiera algún crédito o el nombre de alguno de los acreedores; ellos pueden presentarse y pedir la nulidad de los actos formalizados por las partes, y la ley acepta estos hechos como una medida de carácter necesario.

Finalmente, la ley reglamentaria toma en consideración la omisión de todas estas circunstancias de reglamento y declara nulos los actos que fueran hechos sin la observancia necesaria, determinando también, medidas punitivas para los comerciantes de mala fe que pretendieran burlar la ley en perjuicio de los acreedores.

La comisión entiende que todas estas medidas son necesarias. Si bien, como lo he dicho al principio, el comercio reposa sobre el crédito, entiende que una reglamentación de esta naturaleza no va en perjuicio de los intereses del comercio honesto, sino que prevé las circunstancias justamente para resguardar el crédito del comercio honesto, que tanto beneficia a los intereses del país.

Las distintas instituciones comerciales e industriales, entre las cuales puedo citar la Unión Industrial Argentina, la Liga de Defensa Comercial, la Cámara Gremial de Molineros, la Federación Gremial de Industrias y Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, etcétera, han hecho llegar hasta la comisión su deseo de que las reformas proyectadas sean incorporadas al Código de Comercio como una medida necesaria para garantizar el crédito del comercio honrado.

La comisión los ha tomado en consideración para formular su despacho, y por ello solicita la aprobación de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión en particular el artículo 1º.

Sr. Gómez. — Pido la palabra.

Propongo que en vez de la palabra «clientela», que significa terceras personas que no dependen de quien vende el negocio, se diga en el artículo «la nómina de la clientela».

Sr. Abalos. — Pido la palabra.

En todos los proyectos que se han presentado, y principalmente en el del doctor Melo, que tuvo sanción del Senado, se empleaba la misma expresión, porque la clientela es uno de los elementos constitutivos, podríamos decir, de una casa de comercio; forma parte de ella, del valor del negocio.

Sr. Colombres. — Pido la palabra.

Creo que no es necesario el agregado que propone el señor diputado de la palabra «nómina». Los interesados, si lo estiman conveniente, podrán dar la nómina; pero lo que contempla el artículo es la venta corriente de negocios, en la cual no se determina exactamente lo que se transfiere, sino que se habla simplemente de la venta de tal o cual negocio. Con frecuencia ha ocurrido el caso de que el vendedor se ha instalado a la cuadra del negocio que acaba de transferir, haciéndole la competencia al comprador, quien ha tenido en cuenta, al pagar el precio, la clientela, lo que corrientemente forma parte de lo que se llama la llave del negocio.

Para evitar, pues, los pleitos a que ha dado lugar esa situación y las distintas interpretaciones de la jurisprudencia, es que por este artículo fijamos cuáles son los elementos que constituyen un establecimiento comercial, para el caso de que en el contrato no se haya previsto, entendiéndose que todos esos elementos están incluídos en la venta del negocio.

De modo que, dada la finalidad del artículo, no es necesario establecer que el vendedor debe dar la nómina de la clientela, ya que puede no conocerla, por tratarse de una clientela que compra al contado.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿Insiste el señor diputado en su observación?

Sr. Gómez. — Hice la observación porque es indudable que quien vende un negocio no puede vender la clientela, sino la nómina de ella. Pero como con lo dicho queda aclarado el alcance del artículo, no hago hincapié.

Sr. Presidente (Bunge). — Tiene la palabra el señor diputado Ahumada.

Sr. Ahumada. — De las propias palabras del autor del proyecto derivase la conveniencia de intercalar las palabras que yo propongo: «salvo convención en contrario». Porque puede ocurrir y ocurre con frecuencia el caso a que se ha referido el señor diputado: un comerciante vende su negocio y después establece una casa análoga a corta distancia. Si él se ha obligado a no establecerse dentro de un determinado radio, se le puede exigir el cumplimiento de su obligación si así la ha pactado. De lo contrario no.

Lo mismo en el caso de las instalaciones. Muchas veces el que vende un negocio no vende las instalaciones o la clientela. Por eso conviene intercalar las palabras que he propuesto: «salvo convención en contrario».

Sr. Colombres. — No me parece necesario, por cuanto aquí no se establece que indispensablemente se van a transferir todos estos elementos constitutivos. El artículo es para el caso de que en el contrato se establezca lisa y llanamente la transferencia, sin mencionar específicamente los distintos elementos que la constituyen.

Indudablemente, si en el contrato se establece que el vendedor se reserva las instalaciones o determinada mercadería, lo cual es posible dentro de la terminología de la ley, lo que se excluya en el contrato, no quedará comprendido en la venta. El artículo es para el caso de que no se especifique en qué consiste la transferencia.

No se establece la obligatoriedad de la transferencia total. El artículo rige para el caso de que se convenga la venta total del negocio, sin otras especificaciones.

Sr. Briuolo. — De acuerdo con las observaciones que he escuchado me parecería conveniente la supresión de las palabras «la clientela», porque ésta está implícita en la venta. Esas palabras podrían suprimirse, desde que la venta de «la clientela» no puede tener mayor alcance, ya que esa clientela seguirá o no siéndolo del adquirente de la casa de comercio.

Sr. Colombres. — Ha habido infinidad de pleitos en virtud precisamente de los casos a que me he referido: se vende un negocio en bloque y luego el vendedor se establece a media cuadra, haciendo así una competencia desleal al comprador que ha pagado con el precio, la llave, la clientela, todo lo que constituye el negocio juntamente, con el nombre y el prestigio de la casa. Es con el objeto de evitar esa competencia desleal que se determina el conjunto de lo que constituye el establecimiento para que el comprador no resulte luego burlado. Uno de los elementos constitutivos del negocio es la clientela y por eso la comisión insistiría.

Sr. Briuolo. — Yo no hago mayor hincapié, pero no habrá ninguna disposición que establezca que la clientela es vendible y es inútil legislar sobre eso.

Sr. Parera. — La ley no quiere decir que sea la clientela, los individuos que la constituyen, lo que se venda, sino el valor patrimonial resultante de las relaciones comerciales existentes entre el comerciante que enajena un negocio y las personas que operaban con él. Es evidente que la ley no puede obligar a esas personas a seguir comprando en tal casa de comercio. Esas operaciones se realizarán o no de acuerdo con las disposiciones de las leyes comunes. No son, entonces, las personas las que se imaginan, sino el valor patrimonial que encarna o representa la vinculación preexistente, las relaciones comerciales preexistentes entre el comerciante que

enajena su comercio y las personas que operan con esa casa comercial.

Sr. Gómez. — Al establecer el artículo que a los efectos de la transmisión de los comercios se declara elemento constitutivo a la clientela, parecería que se le obliga al vendedor, se lo solidariza respecto de ella.

Sr. Parera. — La ley no puede imponer una obligación de esa naturaleza.

Sr. Gómez. — Es lo que parece surgir del texto del artículo; parecería obligarse al comerciante a que no continuara realizando operaciones de la misma naturaleza con personas determinadas.

Sr. Parera. — La interpretación está explicada con las palabras del señor miembro informante, del autor del proyecto, y las que acabo de pronunciar.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el artículo 1º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En consideración el artículo 2º.

Sr. Saggese. — Pido la palabra.

Para solicitar una reforma en la parte final de este artículo, donde dice: «y en caso que interviniese, el del escribano con cuya actuación se realizará el acto».

Yo solicitaría del autor del proyecto y del señor miembro informante que en todos los casos la transmisión se hiciera por escritura pública ante escribano, teniendo a la vista el certificado de inhabilitación y los de la administración de patentes, impuestos generales y de la municipalidad.

Un comercio es una propiedad como cualquiera otra y en esos casos el Estado debe salvaguardar en todo sentido los intereses que están en juego.

Entiendo, entonces, que toda transmisión debe hacerse por ante escribano público, llenándose en todos los casos los requisitos de ventas en general, de acuerdo a las leyes vigentes.

Pediría, entonces, al miembro informante de la comisión si tendría inconveniente en aceptar esa reforma.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿La comisión acepta?

Sr. Colombres. — Pido la palabra.

La comisión consideró este aspecto y la conveniencia de exigir que estas transferencias se hicieran por escritura pública; pero también consideró que hay transferencias de negocios chicos en que no es posible hacer incurrir al vendedor en los gastos que significan las transferencias por ante escribano público.

Además, la finalidad principal del proyecto consiste en darle publicidad a estas operaciones, lo que se alcanza con el sistema que establece el mismo. La escritura pública no es sino un requisito formal que poco le agrega, que en realidad no vendría a compensar los inconvenientes que produce y sobre todo la traba que puede significar el cumplimiento de esa formalidad.

En cuanto a la consideración respecto al pago de patente y demás obligaciones que se pudieran tener con el fisco, existe ya el control de parte del Estado perfectamente organizado.

Vamos a realizar con este proyecto en forma paulatina algo que será muy útil y que no puede hacerse de improviso en el presente: la inscripción en el Registro Público de Comercio de todos los comerciantes. Hoy día la mayor parte de ellos no están inscriptos en el Registro Público de Comercio.

Sr. Saggese. — ¿Si me permite el señor diputado?...

Sería un ideal que todos, si no voluntariamente, obligatoriamente se inscribieran. Es de desear que todo comerciante, al establecerse, se inscriba en el Registro Público de Comercio. No sé si este propósito corresponde a esta ley.

Sr. Colombres. — Sería, indudablemente, un gran beneficio; pero la comisión también ha considerado este aspecto y tuvo en cuenta los serios inconvenientes que iba a significar en la aplicación de esta ley que se obligara hoy día a todos los comerciantes a que se inscribieran en el Registro Público de Comercio, aparte de que saldríamos de la esfera de acción de esta ley, pues una disposición seme-

jante debiera de establecerse en el Código de Comercio entre los artículos que tratan de las obligaciones de los comerciantes.

Con esta ley vamos a cumplir ese fin, porque al correr de los años, en virtud de las transferencias de negocios, todos se hallarán inscriptos en el Registro Público de Comercio.

Insisto en que la aplicación de inmediato de esa obligación traería inconvenientes, y son éstos los que se han tenido en cuenta para no establecerla.

Sr. Pflieger. — Pido la palabra.

Deseo proponer dos modificaciones al artículo 2º. Donde dice: «debiendo indicarse la clase de negocio», propongo se agregue: «y ubicación». Así se precisará en las publicaciones el lugar en que se encuentra el negocio que va a venderse, lo que interesa más que el domicilio del vendedor, pues éste puede tenerlo distinto al de su comercio. Diría así: «debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio».

Sr. Abalos. — La comisión no tiene inconveniente en aceptar, desde el momento que los elementos constitutivos están indicados también.

Sr. Pflieger. — La otra observación se refiere a la parte que establece que debe indicarse el domicilio del vendedor y del comprador o del rematador, y en caso de que interviniese, el del escribano. Propongo, en cambio, que diga así: «nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano.»

Sr. Colombres. — Es un cambio de forma en la redacción, quizás más preciso, que propone el señor diputado, pero en realidad ya está establecido.

Sr. Pflieger. — En caso de que interviniesen — porque pueden no intervenir, el rematador y el escribano —, se puntualizará esa exigencia.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Colombres. — No hay inconveniente. Quedaría en esta forma: «debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso

de que interviniesen, el del rematador o escribano, con cuya actuación se realizará el acto.»

Sr. Pflieger. — Propondría también la reducción del término del anuncio en el Boletín Judicial y en otro diario.

La publicación de edictos durante diez días en esos dos diarios absorberá una suma de dinero que, para las pequeñas operaciones de compraventa de negocios que son las que más comúnmente pueden hacerse con el propósito de evitar el pago a algunos acreedores, será onerosa en relación al posible monto de las operaciones. Me parece que con tres días de publicación, o a lo sumo cinco, es bastante. Diez días de anuncio en un diario y además en el Boletín Oficial para la compraventa de un pequeño negocio, que puede realizarse en 500, 800 ó 1.000 pesos, me parece que es demasiado gravoso para el vendedor y el comprador. De manera que yo propondría a la comisión que acepte la reducción del último término a tres o cinco días.

Eso tendría otra consecuencia, señores diputados, y es la reducción del término que va a correr desde la iniciación de las operaciones hasta su terminación. En efecto, se establecen diez días para la publicación de los edictos, luego hay un margen de cinco días más a contar desde la última publicación para que los posibles acreedores puedan reclamar a fin de que se retenga el importe de sus créditos en garantía; luego, si hubiera alguna observación, que puede ser la reclamación de algún crédito, hay veinte días más de plazo para que pueda llegar la orden de embargo sobre esa suma. Quiere decir que desde que se inicia la publicidad de la compraventa hasta que esté en condiciones de poder otorgarse válidamente la escritura, van a transcurrir por lo menos treinta y cinco días, lo que constituye una traba para las operaciones de compraventa de negocios que tienen que someterse a todo ese procedimiento.

De manera, señor presidente, que la finalidad perseguida de garantizar a los acreedores va a convertirse en un entorpecimiento para esta clase de ope-

raciones. Me parece que tres o cinco días son bastantes a los efectos que persigue esta ley.

Sr. Colombres. — Pido la palabra.

El inconveniente de modificar el artículo en la forma que propone el señor diputado estaría en lo siguiente. El comercio hoy día desarrolla sus actividades en toda la República. Hay casas establecidas en Buenos Aires que realizan negocios en Jujuy, por ejemplo; como el Boletín Oficial de Jujuy tarda cuatro o cinco días en llegar a Buenos Aires, el comercio, de esta Capital recién se enterará cuando vaya corrida la mitad de los días de publicación. Es necesario tomar medidas en Jujuy, donde está radicado el deudor, de modo que el plazo no es exagerado; diez días de publicación y cinco días siguientes para dar tiempo a que se tomen las medidas en el caso de que recién el último día de publicación se haya enterado el acreedor.

La suma de plazos que hace el señor diputado para extender los términos a que debe quedar sujeta la terminación de la operación, sólo cabe en el caso en que el vendedor ha ocultado el nombre de algún acreedor; porque si ha expuesto la lista de todas sus deudas, no va a tener ninguno de los entorpecimientos a que se ha referido el señor diputado, porque nadie se va a oponer a la transferencia desde el momento que están reconocidos todos los créditos. La traba será precisamente para aquel que quiere eludir el cumplimiento de la ley, y creo que en este caso más justo es aceptar este pequeño inconveniente en beneficio del comercio honesto y no tratar de ayudar al que anda con ocultaciones.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el artículo 2º con las dos modificaciones aceptadas por la comisión.

Sr. Pflieger. — Solicito que se vote por partes, para poder votar «cinco días», en lugar de «diez», para el anuncio en el Boletín Oficial.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar por partes.

—Se vota y aprueba: «Artículo 2º — Toda transmisión por venta o cualquier

otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, sólo podrá efectuarse válidamente previo anuncio durante...»

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el número de días.

—Se vota y aprueba «diez días».

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el resto del artículo, que se leerá por Secretaría.

—Se vota y aprueba: «... en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realizará el acto.»

Sr. Presidente (Bunge). — En consideración el artículo 3º.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Bunge). — En consideración el artículo 4º.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Tal vez convendría, para evitar pleitos, establecer la forma en que los acreedores deberán notificar su oposición al comprador, o al rematador o escribano que intervengan en el acto. Pueden ocurrir casos de deficiencias en la forma de notificación en los cuales se alegue que la notificación no ha existido. Podría establecerse que se notificará por telegrama, carta certificada, en la forma que la comisión crea más conveniente si acepta esta observación que formulo, a efecto de que la previsión de la ley sea más completa.

Sr. Abalos. — Pido la palabra.

La notificación está reglamentada en los códigos de procedimientos, tanto en la Capital como en las provincias. Esos

códigos determinan la forma como debe hacerse la notificación. Entiendo, por eso, que no hay objeto en establecer aquí lo que los códigos de procedimientos ya determinan.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

No se trata de una notificación judicial. Los códigos de procedimientos reglan todo lo relativo a las notificaciones que se producen en los juicios o litigios. Aquí, en cambio, se trata de una notificación particular que hace el acreedor al comprador, al futuro comprador y al escribano, que son los que van a intervenir en ese acto. De tal manera que no tiene nada que ver el Código de Procedimientos en este caso, porque no hay una relación litigiosa.

Por eso, es que pido que la notificación se haga telegráficamente o con una simple carta certificada con aviso de retorno, a fin de que el comerciante tenga en sus manos prueba fehaciente, para demostrar que ha cumplido con esta exigencia de la ley. Esto es lo que a mí me interesa, para el perfeccionamiento de lo que estamos tratando.

Sr. Presidente (Bunge). — Desde la mesa de la Presidencia, no se ha alcanzado a percibir la modificación propuesta por el señor diputado, por lo cual la Presidencia le pide se sirva envariarla por escrito o reiterarla en voz alta.

Sr. Ahumada. — Hago una observación, a fin de que la comisión establezca en qué forma debe llenarse ese requisito o esa exigencia de la notificación del deudor al futuro comprador, al escribano y al rematador, que intervendrán en el acto. Si la comisión no aceptase este temperamento yo propongo que la notificación se haga telegráficamente o en carta certificada con aviso de retorno.

Sr. Presidente (Bunge). — La Presidencia ruega al señor diputado le envíe por escrito el texto de su modificación.

Sr. Colombres. — Pido la palabra.

Dentro de la redacción de este artículo, cabe toda clase de notificaciones y el oponente podrá elegir ya sea la

notificación judicial, por medio de escribano, o la notificación en forma postal o telegráfica o personalmente, requiriendo constancia de ello. De modo que no es necesario, a nuestro entender, establecer una forma especial de notificación.

El oponente tomará todas las medidas que él crea pertinentes, para el caso de que le fuese necesario probar que ha cumplido con el requisito de la notificación.

Por estas razones la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado Ahumada.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el artículo 4º del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

— Sin observación, se aprueba el resto del proyecto.

Sr. Presidente (Bunge). — Queda sancionado.

13

MODIFICACIONES A LA LEY 4707

Despacho de la mayoría

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Guerra y Marina, en mayoría, ha considerado los proyectos de ley presentados por los señores diputados Colombres y Bosano Ansaldo y otros, sobre modificaciones al capítulo XI y supresión del XIV de la ley 4707; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja en su reemplazo, prestéis vuestra aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el inciso b) del artículo 63 de la ley 4707, en la siguiente forma: Al hijo natural o legítimo de madre viuda, divorciada o abandonada por su esposo, que atiende con su trabajo personal a la sub-